

NEW LEFT REVIEW 111

SEGUNDA ÉPOCA

JULIO - SEPTIEMBRE 2018

ARTÍCULOS

ROBIN BLACKBURN	El proyecto de Corbyn	7
SIMONE WEIL	Meditaciones sobre un cadaver	40
KAREEM RABIE	Rehacer Ramala	48
TROY VETTESE	Congelar el Támesis	70
JIWEI XIAO	¿Reunión tardía?	97
MARCO D'ERAMO	Auge y caída del periódico	121

CRÍTICA

TARIQ ALI	El turno de Yemen	139
ALEXANDER ZEVIN	Un conformista crítico	151
LEONARDO IMPETT	Prometeo cableado	163

WWW.NEWLEFTREVIEW.ES

© New Left Review Ltd., 2000

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

INSTITUTO
25M
DEMOCRACIA

ts
d traficantes de sueños

SUSCRÍBETE

ROBIN BLACKBURN

EL PROYECTO CORBYN

Capital público y New Deal laborista

POR PRIMERA VEZ en su historia, la izquierda parlamentaria británica tiene una posibilidad real de ocupar los principales puestos gubernamentales en este bastión capitalista cuando se realicen las próximas elecciones generales. En lo que sigue exploro los desafíos y las limitaciones que encontraría un gobierno de Corbyn para afrontar los enormes desequilibrios estructurales de la economía del Reino Unido. Expongo los planes que han surgido hasta ahora desde el entorno de su secretario del Tesoro en la sombra, John McDonnell, y algunas ideas adicionales que podrían llevar a Corbyn y McDonnell aún más lejos, si es que ganan las elecciones. Mi atención se centrará en la política económica, donde los partidos socialdemócratas han carecido con demasiada frecuencia de imaginación y han sido embaucados por las panaceas de curandero de la opinión del *establishment*. Pero antes puede ser útil esbozar los contornos del panorama socioeconómico con que se encontrará un gobierno de la izquierda laborista, después de que una década de políticas de austeridad *tory* hayan corroído aún más el que ya era, después de Thatcher y Blair, el orden más desigual y neoliberalizado de toda la Europa occidental.

I. LOS ACHAQUES DE LA ECONOMÍA DEL REINO UNIDO

Los achaques de la economía británica se remontan más allá del momento actual. Los terratenientes capitalistas y los banqueros de la City le habían dado la espalda a la economía productiva del Reino Unido incluso antes de que perdiera su ventaja de primer país industrializado

en la década de 1870, prefiriendo los mayores rendimientos prometidos por la intermediación financiera y la extracción de minerales. La burguesía fabril inglesa siempre ocupó un lugar secundario en la clase dirigente «aristocráticamente capitalista» preexistente¹. En el siglo xx el Imperio y su área esterlina fomentaron el desarrollo desigual en el país y en el exterior, mientras que el Partido Laborista ajustaba a medida las demandas de la clase trabajadora para operar dentro de ese sistema tan desproporcionadamente desequilibrado. La modernización infligida por Thatcher en la década de 1980 no mejoró el sector industrial tal como lo habían hecho los líderes de Alemania Occidental y Japón, sino que lo estranguló con altos tipos de interés, lo que instigó un nuevo giro hacia el sector servicios. Al mismo tiempo, Thatcher levantó las restricciones contra la especulación que hasta entonces regulaban la actividad de los fondos de ahorro nacionales: los planes de pensiones, las pólizas de seguros y las hipotecas proporcionaron el combustible para el despegue apalancado del capital financiero. La privatización de la vivienda pública y los servicios públicos (gas, electricidad, telecomunicaciones, agua, ferrocarril, autobuses) prometía altos rendimientos para los propietarios inmobiliarios y los accionistas, sin obligarlos a comprometerse en la inversión en infraestructuras a largo plazo.

Visto desde la City, el «Big Bang» de Thatcher fue un gran éxito; pero más allá del cinturón en torno a Londres, el horno de la financiarización estaba absorbiendo todo el oxígeno del aire. Los *hedge funds*, los privatizadores, los subcontratistas y los especuladores en los mercados de divisas a menudo obtuvieron grandes ganancias, pero no crearon empresas a largo plazo. El sector industrial se redujo al 17 por 100 del valor agregado bruto en 1997, en comparación con el 26 por 100 que representaba en Alemania, lo que contribuyó a una larga depresión en el norte industrial y a un déficit crónico por cuenta corriente, que obligaron a Gran Bretaña a importar artículos que ya no se fabricaban en el país. Los gobiernos de Blair-Brown mantuvieron esas tendencias, mitigadas tan solo por las pocas migajas lanzadas a las «familias trabajadoras» por un sistema de crédito fiscal que acabó finalmente colapsando bajo el peso del microajuste del responsable del Tesoro². A medida que el nuevo modelo económico del Reino Unido se iba asentando en la década de

¹ Geoffrey Ingham, *Capitalism Divided? The City and Industry in British Social Development*, Oxford, 1985; P. J. Cain y A. G. Hopkins, *British Imperialism: 1688-2015*, 3ª ed., Londres, 2016; Perry Anderson, *English Questions*, Londres y Nueva York, 1994.

² Charlotte Moore, «Tax credits fiasco costs £15m», *The Guardian*, 22 de julio de 2005.

1990 y comenzaba a crecer, en condiciones globales de un capital que se movía sin restricciones, libre, los desequilibrios sectoriales del país también exacerbaron sus desigualdades regionales. El sector servicios se infló hasta representar casi el 80 por 100 del PIB, frente al 69 por 100 en Alemania, con beneficios que dependen desproporcionadamente de los servicios financieros y comerciales basados en Londres y en el sudeste³. Los desequilibrios estructurales se vieron agravados por la hiperinflación de precios de la propiedad inmobiliaria en Londres bajo el Nuevo Laborismo; los niveles de riqueza e ingresos de los más acomodados se dispararon en relación con el resto. La deuda de los hogares aumentó del 85 por 100 de los ingresos disponibles en 1997 al 148 por 100 en 2008⁴.

Al mismo tiempo, el dominio público se vio saqueado sistemáticamente. El mecanismo político empleado fue importado de Estados Unidos: reducción de los tipos impositivos más elevados, argumentando que eso facilitaría la creación de riqueza, y luego recortes de gastos para equilibrar los libros de cuentas. En la década de 1980, Thatcher redujo el impuesto de sociedades del 52 al 35 por 100; el Nuevo Laborismo lo redujo al 28 por 100; los gobiernos de Cameron y May, al 19 por 100. Por debajo de la farsa constitucional del Reino Unido –la prerrogativa real, el discurso de la Reina y la Cámara de los Lores no elegida permanecen intactos–, gran parte del Estado, tanto a escala local como nacional, ha sido sistemáticamente privatizada y financiarizada. El gobierno ya no «suministraba» los servicios públicos, ahora los «facilitaba»⁵. El principal legado estructural del Nuevo Laborismo se encuentra ahí, en el vaciamiento de grandes sectores de bienes públicos y en el suministro de servicios en beneficio de empresas a la caza de rentas a través de la expansión de iniciativas de financiación privada. Bajo esos planes, las empresas contratantes establecen entidades de propósito especial (*special-purpose vehicles*), que toman prestado capital para construir y mantener escuelas, hospitales y prisiones, con flujos de ingresos garantizados por treinta años o más de concesión pública. Los gobiernos de Thatcher y Major ya habían experimentado con las iniciativas de financiación privada. Blair y Brown las adoptaron a mucha mayor escala, aconsejados por sus amigos en la City de que «asociarse» con el capital financiero sería una forma más propicia de recaudar recursos para programas de construcción de escuelas y

³ UN National Accounts Main Aggregates Database.

⁴ Daniel Harari, «Household Debt: Statistics and Impact on Economy», House of Commons Library Briefing Paper, 10 de mayo de 2018.

⁵ Stephen Wilks, *The Revolving Door and the Corporate Colonization of UK Politics*, Londres, 2016, pp. 5, 9; James Meek, *Private Island*, Londres y Nueva York, 2014.

hospitales que imponer impuestos más elevados a las grandes empresas y a los ricos.

La obsesión por las iniciativas de financiación privada reflejaba la transición más amplia en la economía británica de la producción a los servicios bajo la égida del capitalismo financiarizado. La búsqueda de rentas es la forma de ganancia característica de este régimen, con sus activos privatizados y apalancados (terrenos, edificios, patentes, cadenas de radio, depósitos de minerales, plataformas digitales, etcétera) y las entidades de propósito especial como entidad legal preferida⁶. A corto plazo, las rentas pueden cosechar recompensas inesperadas; pero a largo plazo la producción de nuevos valores contribuye más a impulsar la productividad. La fórmula de las iniciativas de financiación privada, originalmente diseñada para grandes proyectos en infraestructuras como carreteras y hospitales, se extendió a la eliminación de las basuras, el transporte, la gestión de instalaciones, la atención social, la tecnología de la información, los equipos militares, el mantenimiento de la seguridad y el suministro de energía⁷. Esos lucrativos contratos no fueron asignados en un mercado genuinamente competitivo, sino, en realidad, distribuidos a voluntad entre un puñado de empresas: Balfour Beatty, Carillion, Interserve, Jarvis, Kier, Serco⁸. Las agencias públicas se comprometieron formalmente a pagar más de 300 millardos de libras anuales a las iniciativas financieras privadas para cubrir los reembolsos de deudas, los costes de financiación, las tasas de mantenimiento y las cargas adicionales hasta la década de 2040, lo cual representa una enorme ayuda del contribuyente al sector privado⁹. La crisis de 2008 no permitió detener el jolgorio: Brown creó en el Tesoro una Unidad de Financiación de Infraestructuras para inyectar crédito público a los inversores en

⁶ Sobre los terrenos, véase Brett Christophers, *The New Enclosure: The Appropriation of Public Land in Neoliberal Britain*, de próxima publicación en Verso en 2018.

⁷ David Walker y John Tizard, *Out of Contract: Time to move on from the 'love-in' with outsourcing and PFI*, Smith Institute, enero de 2018, p. 5.

⁸ La Office for Fair Trading multó a ciento tres firmas constructoras por colusión en licitaciones entre 2000 y 2006: Michael Mair y Paul Jones, «Politics, Government and Corruption», en David Whyte (ed.), *How Corrupt is Britain?*, Londres, 2015, pp. 124-130.

⁹ HM Treasury, «Current projects as at 31 March 2017». La Oficina Nacional de Auditorías descubrió que los costes financieros anuales soportados por las entidades de propósito especial eran entre un 2 y un 4 por 100 superiores a los garantizados por el comparador del sector público. El coste general de la construcción de un grupo de escuelas en el marco de iniciativas de financiación privada fue el 40 por 100 mayor. National Audit Office, «PFI y PF2», 18 de enero de 2018, pp. 14-16. Según esta entidad, el coste extra de las iniciativas de financiación privada no fue recuperado por la eficiencia operacional, p. 10.

iniciativas de financiación privada, quienes luego los «reinvertieron» de nuevo en proyectos públicos¹⁰.

Además de los costes de financiación adicionales y el desmesurado período de amortización, las iniciativas de financiación privada trajeron consigo un deterioro de las pautas del servicio público y de la rendición de cuentas democrática. La ingeniería financiera encarnada en las entidades de propósito especial no aumentó el rendimiento subyacente, sino todo lo contrario: produjo gerentes sin habilidades específicas ni conocimiento local de su sector, y empleados desmoralizados y mal pagados, lo que ha contribuido a la baja productividad que ha caracterizado a la economía británica durante décadas¹¹. La tasa de inversión en el Reino Unido –un 17 por 100 del PIB– está cinco puntos por debajo de la media de la OCDE y se concentra desproporcionadamente en Londres y el sudeste. El gasto en I + D también es notablemente bajo: 1,6 por 100 del PIB, frente al 2,1 por 100 en la zona euro y el 2,8 por 100 en Estados Unidos. Mientras tanto, la proporción del flujo de tesorería discrecional de las sociedades no financieras canalizado a los accionistas aumentó del 39 al 46 por 100 desde 1990, con un porcentaje creciente fluyendo hacia el extranjero. El Reino Unido también tiene menores ingresos fiscales como porcentaje del PIB que sus vecinos: el 33 por 100, frente al 38 y el 45 por 100 registrado, respectivamente, en Alemania y Francia¹².

La crisis de 2008 reveló los escandalosos niveles de deuda privada que sustentaban la economía financiarizada británica: la deuda de los hogares se situaba en el 98 por 100 del PIB, la de las sociedades no financieras en el 109 por 100, la de las corporaciones financieras en el 219 por 100, lo que asciende a un total del 750 por 100, si se incluyen los derivados: el porcentaje más alto de cualquier economía del G7. Incluyendo la deuda pública del 81 por 100, el pasivo total del Reino Unido antes del colapso

¹⁰ Véase See Mike Raco (ed.), «Britain for Sale?», *Smith Institute*, mayo de 2016, p. 13.

¹¹ Alan White, *Shadow State*, Londres, 2016, proporciona muchos ejemplos de mala fe y gestión negligente. Sobre el bajo valor de las PFI, véase National Audit Office, «PFI y PF2», y D. Walker y J. Tizard, *Out of Contract: Time to move on from the 'love-in' with outsourcing and PFI*, cit., pp. 5, 7, que ofrece muchos ejemplos reveladores de lo derrochadoras e inapropiadas que han resultado ser la mayoría de las PFI. También documentan la evisceración de la rendición de cuentas democrática bajo el régimen de las iniciativas de financiación privada. Tizard es un exalto ejecutivo de Capita y líder del Consejo del Condado de Bedfordshire.

¹² Michael Jacobs, Alfie Stirling y Catherine Colebrook, «Out of Shape: Taking the Pulse of the UK Economy», *Institute for Public Policy Research*, noviembre de 2016, pp. 9, 11-12, 25-26.

de 2008 era del 487 por 100 de su PIB, superior al de Japón¹³. Cuando estalló la crisis se retiraron todas las medidas de contención para salvar al hipertrofiado sector financiero: un total de 1,2 billones de libras en rescates bancarios y garantías, a los que se añadieron 445 millardos en flexibilización cuantitativa entre 2009 y 2016¹⁴. A medida que la eurozona era golpeada por la crisis, las cifras principales de la recuperación de Gran Bretaña parecían impresionantes: en 2015 el PIB había crecido el 14 por 100 desde su mínimo de 2009; la riqueza había crecido el 35 por 100. Pero incluso el economista jefe del Banco de Inglaterra podía preguntar: «¿Recuperación de quién?»¹⁵.

El dinero público vertido en el sector financiero impulsó otra burbuja bursátil e inmobiliaria en Londres y el sudeste del país, donde la riqueza media ha aumentado casi el 50 por 100 desde la crisis y los ingresos de los principales ejecutivos del Financial Times Stock Exchange 100 se cuadruplicaron entre 1998 y 2015. Entretanto, la austeridad que se suponía que debía remediar todo esto ha afectado sobre todo al norte del país, mucho más dependiente del empleo en el sector público. El salario real medio aún está por debajo de su nivel de 2008. El gasto de los ayuntamientos en Inglaterra se redujo el 26 por 100, en promedio, bajo la coalición conservadora-liberaldemócrata, y se redujeron los salarios del sector público; los maestros de escuela, que trabajan cincuenta y cinco horas a la semana, vieron su sueldo real caer el 15 por 100. La deuda personal está volviendo a aumentar, especialmente entre los jóvenes, que ahora se ven afectados por enormes préstamos estudiantiles asociados a la graduación; muchos se están debatiendo con los reembolsos. Los duros recortes en las ayudas a la vivienda han visto subir los niveles de pobreza por encima del 20 por 100 para las personas en edad de trabajar; ha habido un aumento en las personas que duermen mal, en la inseguridad laboral, en la ansiedad y la depresión¹⁶. En junio de 2017 el incendio de la Grenfell Tower ofreció un ejemplo horrendo de la disminución de las normas de seguridad causada por prácticas corruptas de adquisición y la subcontratación de la

¹³ James Meadway, «Why We Need a New Macroeconomic Strategy», New Economics Foundation, 26 de abril de 2013, pp. 10-11.

¹⁴ Andrew Haldane *et al.*, «QE: The Story so Far», Bank of England, octubre de 2016.

¹⁵ Andrew Haldane, «Whose Recovery?», Bank of England, junio de 2016.

¹⁶ Véase Philip Stevens, «Brexit Britain may soon be humming John McDonnell's Marxist tune», *Financial Times*, 9 de marzo de 2018; A. Haldane, «Whose Recovery?», cit.; Kiri Tunks, «Towards a National Education Service», en Mike Phipps (ed.), *For the Many: Preparing Labour for Power*, Londres, 2017; D. Harari, «Household Debt: Statistics and Impact on Economy», cit.

responsabilidad¹⁷. El colapso a principios de 2018 de Carillion, la segunda mayor empresa de construcción del país, reveló la mala calidad del suministro y el mantenimiento de la infraestructura británica en la era de las iniciativas de financiación privada. A pesar de las advertencias sobre su rentabilidad, a Carillion se le habían otorgado varios grandes contratos del sector público pocos meses antes de que se hundiera¹⁸.

2. ¿CAMBIO DE CICLO?

Ésas eran las condiciones en las que el mensaje radical de Corbyn dejó oír una nota nueva. Determinados factores contingentes –sobre todo, las consecuencias inesperadas del giro de Edward Miliband en favor de las primarias abiertas y de la idea «un miembro, un voto» en las elecciones de la dirección del partido en 2015– le permitieron captar la atención del público entre el que su programa de cambio estructural podía atrapar el viento del descontento popular con un sistema que evidentemente estaba fallando en gran parte del país. Tras haber desaparecido prácticamente durante el período blairita, la izquierda laborista ha vuelto a la vida. Desde sus orígenes en el Partido Laborista Independiente de Keir Hardie y las tradiciones de la iglesia humilde (cuáquera, metodista), la izquierda laborista siempre ha supuesto la conciencia del partido, su «corazón latente», complementado por los «cerebros» de los fabianos y sus avatares neoliberales, y por el «músculo» financiero de las burocracias sindicales¹⁹. Dentro de las estructuras *sui generis* del partido, la base de la izquierda han sido los afiliados corrientes, mientras los sindicatos controlaban el aparato, la conferencia y el Comité Ejecutivo Nacional, y

¹⁷ El Royal Borough of Kensington, el municipio más rico del país, entregó la administración de Grenfell Tower a una empresa de gestión privada, KCTMO, que a su vez contrató a la empresa de construcción francesa Artelia para gestionar su remodelación, lo que hizo trayendo a una docena más de subcontratistas. El resultado fue juzgado como una monstruosidad que afectaba negativamente a los precios de las propiedades vecinas, por lo que se tomó la decisión de cubrir el edificio con un revestimiento más atractivo; pero resultó muy inflamable, de modo que un pequeño incendio en una nevera defectuosa convirtió todo el edificio en un infierno, provocando setenta y dos muertes y dejando a centenares de personas sin hogar.

¹⁸ National Audit Office, «Investigation into the government's handling of the collapse of Carillion», 7 de junio de 2018; Gill Plimmer, «Huge debts and hubris caused Carillion to come off the rails», *Financial Times*, 15 de enero de 2018; y Henry Mance y George Parker, «Watchdog exposes lost PFI billions amid Carillion fallout», *Financial Times*, 18 de enero de 2018.

¹⁹ Véase el ensayo en dos partes de Tom Nairn «The Nature of the Labour Party», en *NLR* 1/27, septiembre–octubre de 1964 y *NLR* 1/28, noviembre–diciembre de 1964.

la derecha laborista mantenía su dominio sobre el grupo parlamentario. En su momento, la izquierda laborista apoyó campañas novedosas contra las armas nucleares, la opresión colonial y las fechorías de su propio partido en el gobierno, pero permanecía atrapada dentro de la ideología del laborismo y su deferencia hacia las instituciones del Reino Unido.

La gran ventaja de Corbyn en el momento político actual es que es un representante genuino del igualitarismo, uno de los pocos políticos del Reino Unido en cuya boca el término «justicia» no se convierte inmediatamente en cenizas. No le gusta la personalización de la política ni el término «corbynistas», prefiriendo describir a los cientos de miles de miembros del partido que votaron por él como «partidarios de la socialdemocracia radical». El tipo de socialdemocracia que defiende Corbyn tiene varias fuentes, pero en esencia es el bennismo, tal como se manifestó en la década de 1980 cuando él fue el principal lugarteniente parlamentario de Tony Benn²⁰. Desde su llegada al Parlamento en 1983, Corbyn ha defendido incansablemente la necesidad e integridad del sector público, oponiéndose a la gran oleada de privatización, subcontratación e iniciativas de financiación privada. Se inspiró en las conclusiones proféticas de Paul Foot en *Private Eye* sobre estas últimas y fue un crítico tenaz y mordaz del blairismo. A diferencia de Benn, no se ha centrado en cuestiones constitucionales, sino que ha hecho campaña contra un orden político elitista, mercenario y dotado de un fuerte sesgo de clase. Como presidente de Stop the War, desenmascaró las mentiras y el fraude del Nuevo Laborismo sobre Iraq. Cuando muchos parlamentarios quedaron expuestos en un escándalo de despilfarros, Corbyn presentó la cuenta de gastos más baja de todos los parlamentarios. Si tuviera la oportunidad, aboliría la Cámara de los Lores y la prerrogativa real, pero su prioridad es rescatar los servicios públicos y combatir el estancamiento, la pobreza y la desigualdad.

Después de tres años al frente del partido, con dos contundentes victorias en su haber y un aumento sin precedentes de diez puntos en el voto popular cosechadas por el Partido Laborista en 2017, la posición personal de Corbyn parece segura por el momento, pero su control sobre los parlamentarios laboristas es bastante débil. La «soberanía parlamentaria», entendida como la ausencia de obligación de los representantes electos de rendir cuentas a su partido, es un principio clave del laborismo, y los diputados se han considerado tradicionalmente «por encima» de las

²⁰ Richard Seymour, *Corbyn: The Strange Rebirth of Radical Politics*, nueva ed., Londres 2017, pp. 1-6.

opiniones de los afiliados. Durante su primer año como líder, los parlamentarios laboristas de derechas gritaban regularmente «¡Renuncie!» o «¡Siéntese y cálese!», cuando Corbyn se levantaba para dirigirse al Parlamento²¹. En junio de 2016, dos tercios de su gabinete en la sombra, mayoritariamente blairista, que había heredado de Miliband, afirmando que él era personalmente responsable del voto a favor del abandono de la Unión Europea en el referéndum del Brexit, presentó la renuncia colectiva para obligarle a dimitir; ello fue seguido por una moción de «confianza» presentada en su contra, que contó con el apoyo de ciento setenta y dos parlamentarios laboristas, casi tres cuartos del total, mientras únicamente cuarenta se posicionaron a su favor (entre ellos John McDonnell, su secretario del Tesoro en la sombra). Ante lo que se denominó «golpe de gallinero», Corbyn no pestañeó. La fibra moral que lo había sostenido durante más de treinta años en su oposición respetuosa a la disciplina partidaria le ayudó también en esta ocasión; en las elecciones internas celebradas en septiembre obtuvo 313.209 votos, incrementando así el porcentaje obtenido un año antes, del 59,5 por 100, al 61,8 por 100 (aproximadamente 62.000 votos más).

Todo el mundo creía que la decisión de May de convocar elecciones anticipadas en junio de 2017 pondría fin al corbynismo; la opinión liberal sostenía que era «inelegible». Pero Corbyn obtuvo el voto popular más alto (12,9 millones) obtenido por los laboristas desde 1997, superando las cifras de Blair en 2001 (10,7 millones) y 2005 (9,6 millones), así como los 8,6 millones de Brown en 2010 y los 9,3 millones de Miliband en 2015, con una mayoría abrumadora, además, entre los votantes jóvenes²². El efecto de esos resultados, apenas un año después del sobresalto del referéndum del Brexit, fue un cambio radical del clima político general en Gran Bretaña, pero hacia la izquierda, no a la derecha como habían predicho los partidarios reaccionarios del Brexit. Tácitamente se entendió que los votos procedentes de las antiguas regiones industriales septentrionales habían inclinado la balanza en el Brexit²³; el aumento del apoyo laborista en junio de 2017 mostró que muchos votantes habían

²¹ La reacción de Blair fue de la misma índole: «Si tu corazón está con Corbyn, hazte un trasplante».

²² El contraste con los partidos neoliberales de centroizquierda de la eurozona es aún más marcado. Frente al 40 por 100 de los laboristas de Corbyn, el SPD alemán raspaba el 20 por 100, el PD italiano el 19 por 100 y los socialistas franceses apenas el 6 por 100 en las últimas elecciones.

²³ Tom Hazeldine, «La revuelta de las áreas industriales deprimidas», *NLR* 105, julio-agosto de 2017.

recibido con agrado el radicalismo de Corbyn. Al día siguiente de las elecciones en las que su mayoría se redujo a unos 750.000 votos (317 escaños frente a 262), May les dijo demudada a los parlamentarios conservadores: «La austeridad ha terminado»²⁴. El gobierno abandonó sus objetivos de eliminar el subsidio para calefacción en invierno a los jubilados, así como el «triple bloqueo» sobre pensiones y comidas escolares gratuitas para los niños en la escuela primaria. A quienes afirmaban que las elecciones solo se podían ganar desde el centro, Corbyn podía responderles que el centro se había desplazado:

En la actualidad el centro no está donde estaba hace veinte o treinta años. Está surgiendo un nuevo consenso a partir de la gran crisis económica y los años de austeridad, cuando la gente comenzó a encontrar una voz política que colmara sus esperanzas de algo diferente y mejor. 2017 puede ser el año en que la política finalmente se reponga del colapso de 2008, porque hemos ofrecido a la gente una opción clara.²⁵

«Este es el verdadero centro de gravedad de la política británica», dijo en la conferencia del Partido Laborista, tres meses después de las elecciones. «Ahora somos la principal corriente política».

Hijos de un tiempo más sabio

El aumento en el apoyo laborista se atribuyó en buena medida al atractivo de su Manifiesto 2017, «For the Many, Not the Few», cuyo título se hacía eco de «The Mask of Anarchy» escrita por Percy B. Shelley en 1819 después de la masacre de Peterloo y su llamamiento final a la acción, invocado repetidamente en los mítines electorales de Corbyn: «Alcémonos como leones después del sueño, en número invicto [...] ¡Porque somos muchos y ellos son pocos!». Una de las características más llamativas del Manifiesto era su crítica confiada de los principios centrales del neoliberalismo: privatización, primacía de los accionistas, pagos estratosféricos a los directivos, predominio del sector financiero²⁶. Para un país como Gran Bretaña, después de cuarenta años de thatcherismo implacable y transpartidario, esto marcaba un nuevo y refrescante cambio en el clima

²⁴ Francis Elliott, «Austerity is over, May tells Tories», *Sunday Times*, 13 de junio de 2017.

²⁵ Discurso pronunciado en la Conferencia del Partido Laborista de 2017.

²⁶ La prosa era de Andrew Fisher, jefe de políticas públicas treintañero en la oficina de Corbyn; anteriormente coordinador del Left Economics Advisory Panel de McDonnell; autor de *The Failed Experiment* y *How to Build an Economy that Works* (2014), un vívido panfleto antineoliberal que pedía mayor democracia económica.

político-ideológico. La privatización de bienes y servicios básicos, según el Manifiesto, había provocado costes más altos y peor calidad, ya que los precios se habían elevado para pagar dividendos. La factura del agua había aumentado un 40 por 100 desde la privatización; el servicio postal, vendido a bajo precio y objeto de especulación con sus acciones, había aumentado los costes sin cumplir las obligaciones del servicio al cliente. Los proveedores de energía habían sobrecargado los recibos en más de 2 millardos de libras en 2015: «La privatización no ha dado resultado». El sistema financiero había sido «amañado para unos pocos». El sector productivo del Reino Unido sufría de «años de negligencia por parte de los gobiernos»: «Este potencial desperdiciado nos está perjudicando a todos». Era la única economía desarrollada importante en la que las rentas salariales habían caído incluso tras la recuperación del crecimiento después de la crisis financiera. «La mayoría de las personas que trabajan en Gran Bretaña ganan hoy menos, si se tiene en cuenta la inflación, que hace diez años»:

La desigualdad se ha disparado a medida que la economía se ha desplazado hacia empleos poco remunerados e inseguros. La base industrial de Gran Bretaña se ha reducido y hemos confiado demasiado en el sector financiero, centrado en Londres y el sudeste del país [...] El fracaso de Gran Bretaña en conseguir que todas sus economías regionales y locales funcionen se puede constatar en el deterioro de la balanza por cuenta corriente del país, el débil crecimiento de la productividad y la inversión insuficiente en infraestructuras²⁷.

Contra esta situación, el Manifiesto afirmaba que «la creación de riqueza es un esfuerzo colectivo entre trabajadores, empresarios, inversores y gobierno. Todos contribuimos y debemos compartir equitativamente las recompensas». Enfrentado a la gigantesca desigualdad del Reino Unido, sus propuestas concretas eran modestas, por decirlo amablemente, pero en absoluto insignificantes. Un gobierno de Corbyn impondría a las empresas un impuesto sobre las retribuciones excesivas y requeriría que las que desearan contratar con el Estado redujeran su brecha salarial a una proporción de 20:1. Los laboristas ampliarían el impuesto de actos jurídicos documentados respecto a una gama más amplia de activos financieros, impondrían una firme barrera entre la banca de inversión y la minorista, y explorarían la división del Royal Bank of Scotland, nacionalizado durante la crisis, para crear bancos locales de utilidad pública²⁸.

²⁷ The Labour Party Manifesto 2017, «For the Many, Not the Few», Londres, 2017, pp. 19, 8, 13.

²⁸ *Ibid.*, pp. 8, 14-15, 16, 17.

El eje central del Manifiesto era el reequilibrio económico al margen del sector financiero, la reanimación de las economías productivas regionales mediante la inversión pública, la renacionalización, la protección ambiental y el gasto social igualitario. El pivote de la estrategia industrial del Partido Laborista es un Banco Nacional de Inversiones (BNI), dirigido por un «conjunto de expertos de confianza», que incluirá a economistas, industriales, empresarios y sindicalistas progresistas, y que recaudaría y gestionaría un fondo de 250 millardos de libras, repartidos en diez años, para invertir en nuevas tecnologías y en economía e infraestructura de la información, con el objetivo de transferir el 60 por 100 de la energía a fuentes sin carbón o renovables y elevar la financiación de la Investigación y Desarrollo al 3 por 100 del PIB para 2030. Esto sería un verdadero impulso para la I + D nacional, que en 2016 fue de 33 millardos de libras²⁹. El BNI apoyaría una red de bancos de desarrollo regional, proporcionando «financiación paciente y a largo plazo» a pequeñas empresas, lo cual reduciría las brechas existentes en la cadena de suministro y promovería formas alternativas de propiedad como las cooperativas. Aunque el respaldo a las cooperativas y pequeñas empresas ha sido durante mucho tiempo un elemento básico de los manifiestos laboristas, el compromiso con un sistema financiero de utilidad pública es nuevo, como lo es el reconocimiento del Instituto Fraunhofer de Alemania o del Fondo Estatal de Pensiones de Noruega³⁰.

Renacionalizaciones complejas

Un gobierno de Corbyn se comprometería con un programa de nacionalización de gran alcance, incorporando servicios públicos de gran envergadura (ferrocarriles, agua, energía y correos) a la propiedad pública, «para ofrecer precios más bajos, mayor rendición de cuentas y una economía más sostenible». McDonnell ha argumentado que los bajos tipos de interés permitirían un amplio programa de nacionalización de servicios públicos rentables; de hecho, generarían beneficios. Pero esta coyuntura no durará eternamente y los préstamos necesarios

²⁹ Office for National Statistics, «Gross domestic expenditure on research and development, UK: 2016», 15 de marzo de 2018.

³⁰ Un informe encargado por McDonnell propuso que los laboristas subrayaran el nuevo planteamiento en la «inversión productiva» basando el Banco Nacional de Inversiones en la histórica ciudad fabril de Birmingham y desplazando también allí algunas funciones del Banco de Inglaterra. «Financing Investment», GFC Economics, diciembre de 2017; Jim Pickard, «Labour looks at making mortgage-lending harder for banks», *Financial Times*, 12 de diciembre de 2017.

deberían asegurarse tan pronto como se hayan hecho las valoraciones apropiadas. Visto con más detalle, las tácticas y el alcance de lo que se propone varían según el sector. En el caso de los ferrocarriles, se dejarían extinguir los contratos existentes para los servicios de pasajeros y las operaciones ferroviarias volverían a estar bajo control público³¹. El mosaico «disfuncional» de empresas privatizadas de agua y alcantarillado, principalmente en manos de inversionistas extranjeros, sería reemplazado por instituciones regionales de propiedad pública mediante el intercambio de las inversiones existentes por deuda pública. Dado que las compañías de suministro de agua son rentables, argumenta McDonnell, esto significaría una inversión para los contribuyentes, no un coste: «Cuando pides prestado para comprar un activo y ese activo produce ganancias, como sucede con el agua, eso cubrirá los costes de endeudamiento»³². Se ha estimado que la propiedad pública podría reducir los costes de las compañías hídricas en 2,3 millardos de libras cada año, al eliminar los dividendos de los accionistas y reducir el interés sobre las deudas³³. Los ahorros podrían pasarse a los clientes, utilizarse para invertir en mejoras, entregarse al Tesoro, o imaginar alguna combinación de las tres posibilidades. Al menos un bufete de abogados de la City cree que el Parlamento podría especificar el nivel de compensación ofrecido a los accionistas, si existiera un mandato electoral para la nacionalización³⁴. Aquí podría convenir compensar solo a los accionistas que sean pensionistas, utilizando el dividendo para hacerlo.

En el sector de la energía, los planes laboristas son más imprecisos: «Apoyar la creación» de empresas de propiedad pública, «rivalizar con los proveedores privados de energía existentes». En cuanto al servicio postal, los laboristas solo se comprometen a la renacionalización «en cuanto se presente una oportunidad»³⁵. Las iniciativas de financiación privada no se mencionaban en el Manifiesto 2017, pero McDonnell ha anunciado que bajo un gobierno laborista no habría nuevos proyectos que contemplaran estas y que los existentes serían devueltos «al país»,

³¹ La infraestructura ferroviaria (estaciones, vías, túneles), privatizada en 1996 y desmantelada por sus accionistas, se renacionalizó después del escándalo del accidente del Hatfield en 2000, que reveló cuánto se habían comprometido las normas de seguridad en aras de ganancias rápidas.

³² McDonnell en el programa *Today* de la BBC, citado en Jonathan Ford y Gill Plimmer, «Buying back the family silver», *Financial Times*, 27 de febrero de 2018.

³³ Kate Bayliss y David Hall, «Bringing Water into Public Ownership: Costs and Benefits», mayo de 2017.

³⁴ J. Ford y G. Plimmer, «Buying back the family silver», cit.

³⁵ The Labour Party Manifiesto 2017, «For the Many, Not the Few», cit., pp. 19, 20.

restableciendo la rendición de cuentas democrática en la prestación de los servicios públicos³⁶. Un primer paso podría ser compilar un registro oficial exhaustivo de las iniciativas de financiación privada y de las asociaciones público privadas [*public private partnerships*] existentes, que arroje luz sobre sus términos y condiciones fundamentales³⁷. Dichos contratos constan cada uno de ellos de cientos, cuando no miles, de páginas, y se elaboraron con la ayuda de contables expertos para ocultar la verdadera responsabilidad y propiedad de los mismos. El dinero prestado a las entidades de propósito especial, o que debería reembolsarse a tenor de las iniciativas de financiación privada, a menudo se mantiene en paraísos fiscales situados en el extranjero y, por consiguiente, más allá del alcance de la hacienda británica, lo cual es resultado de las iniciativas del propio gobierno a este respecto. Se necesitará entonces el poder nacionalizador del gobierno para devolver estos instrumentos «al país».

La defensa directa de la propiedad pública por la izquierda laborista dirigida por Corbyn ha aprovechado un profundo descontento con los servicios privatizados del Reino Unido. En una encuesta, el 75 por 100 de los encuestados se mostraba partidario de la renacionalización del ferrocarril y la energía, y el 83 por 100 apoyaba la recuperación del control del agua³⁸. Lo que se necesita ahora es una reinención del concepto de bien público, que no puede alcanzarse sin la propiedad pública, pero que también requiere múltiples líneas convergentes de rendición de cuentas, consulta, determinación e iniciativa. Corbyn y McDonnell ya han empezado a defender la mayor rendición de cuentas democrática que la propiedad pública debería traer consigo: «No los modelos centralizados y remotos de las décadas de 1940 y 1950, [sino] modelos de propiedad que involucren a los trabajadores y los consumidores, basados en principios cooperativos»:

La tecnología de la era digital debería empoderar a los trabajadores, permitiéndonos cooperar a una escala que antes no era posible. Y, sin embargo, con demasiada frecuencia ha permitido que surja una forma de capitalismo más rapaz y explotadora. Mirad a Uber, Deliveroo y otras empresas similares. Las plataformas que usan estas compañías son las tecnologías del futuro, pero con demasiada frecuencia sus modelos comerciales dependen

³⁶ John McDonnell, «Discurso a la Conferencia del Partido Laborista de 2017».

³⁷ D. Walker y J. Tizard, *Out of Contract: Time to move on from the 'love-in' with outsourcing and PFI*, cit., pp. 4, 22. Los autores advierten que muchos contratos de iniciativas de financiación privada se han extendido sin el debido escrutinio, porque el Brexit ha distraído la atención.

³⁸ J. Ford and G. Plimmer, «Buying back the family silver», cit.

de la creación de un monopolio efectivo en su mercado y de su uso para hundir los salarios y las condiciones de trabajo [...]. Pero imaginemos una Uber dirigida cooperativamente por los conductores, que controlasen colectivamente su futuro, acordando sus propios salarios y condiciones, con ganancias compartidas o reinvertidas³⁹.

Un aspecto importante de la propiedad pública responsable sería el acceso abierto a la información, que resulta esencial para el control consciente de la economía, como ha señalado Diane Elson⁴⁰. Las agencias reguladoras existentes –la Office of Water Regulation, la Office of Gas and Electricity Markets, la Office of Communications, etcétera– tienen un historial muy pobre en cuanto a la rendición de cuentas de los inversores privados, pero podrían verse sacudidas y recibir instrucciones para controlar la inversión, los resultados y los precios. Podrían aprovechar lo que Slavoj Žižek llama la «visión de paralaje» de productores y consumidores, de agentes colectivos e individuales ubicadas en distintas localizaciones⁴¹.

El laborismo planea financiar su gasto público aumentando el impuesto sobre la renta en el 5 por 100 superior y elevando el tipo del impuesto de sociedades del 19 al 26 por 100 para las grandes empresas, todavía muy por debajo del 30 y el 33 por 100 aplicados, respectivamente, en Alemania y Francia. El Manifiesto 2017 también extendería el impuesto de actos jurídicos documentados para gravar las transacciones financieras, eliminando un privilegio disfrutado por muchas firmas de la City, cuyas transacciones están exentas de este impuesto, porque supuestamente son «creadoras de mercado». Una estimación cuidadosa reconoce que ello podría generar un ingreso extra anual de entre 1,2 y 1,9 millardos de libras⁴². El Manifiesto también se comprometía a revisar y

³⁹ Jeremy Corbyn, Discurso a la Conferencia sobre Cooperativas del Partido, 14 de octubre de 2017. Véase también la promesa de McDonnell de que los laboristas pondrían los servicios y las industrias nacionalizadas «en manos de los que los utilizan y los hacen funcionar», aprendiendo de las experiencias cotidianas de los trabajadores y los consumidores: Discurso a la Conferencia sobre «Modelos alternativos de propiedad», Londres, 10 de febrero de 2018.

⁴⁰ Véase Diane Elson, «Market Socialism or Socialization of the Market», *NLR* I/172, noviembre-diciembre de 1988, p. 43.

⁴¹ Slavoj Žižek, *The Parallax View*, Cambridge (MA), 2006, p. 53; ed.cast.: *La visión de paralaje*, México DF, 2006.

⁴² Véase Avinash Persaud, «Closing the Stamp Duty Loophole», *Intelligence Capital*, abril de 2015. La exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados a menudo es «heredada» por nuevas corporaciones financieras, incluidos los *hedge funds* y las entidades correspondientes de especulación sobre los precios de los instrumentos financieros, que han desplazado a los agentes de bolsa tradicionales, que realmente sí eran creadores de mercado.

establecer un impuesto más ecuánime sobre la propiedad residencial –el impuesto municipal existente es regresivo en muchos aspectos– y sobre los terrenos mantenidos en reserva por los promotores inmobiliarios especulativos. Ahí radica quizá la mayor esfera de acción para gravar la riqueza en el Reino Unido hoy en día: los valores de las casas no se han evaluado desde 1991, antes de que despegara la burbuja de la vivienda. Una nueva valoración y nuevas franjas de precios para los impuestos podrían permitir la recaudación de sumas impresionantes⁴³.

En otras áreas –el sistema escolar, la salud, la vivienda, la política exterior–, el Manifiesto reflejaba la tenaz resistencia de la derecha laborista. La promesa laborista en 2017 de abolir las tasas universitarias y restaurar las subvenciones para el mantenimiento de los estudiantes supuso una reversión sustancial de la política del Nuevo Laborismo, pero no se preveían medidas para contrarrestar el impulso hacia el modelo escolar competitivo estadounidense. En cuanto a la sanidad, no se mencionaban proyectos de ley para evitar que continúe la mercantilización del Servicio Nacional de Salud o para detener la venta de sus activos, como habían prometido Corbyn y McDonnell en la Conferencia del Partido en 2016. En cambio, el Manifiesto reafirmaba tácitamente el *statu quo* de la provisión comercial⁴⁴. Sobre la vivienda, aunque los laboristas mantenían el lema «Casas seguras para todos», no ofrecían una alternativa que contrapusiera el derecho universal a la vivienda, respaldado por la provisión social, a la aspiración generalizada a la propiedad, base del mercado financiero de la vivienda, que ahora excluye a la mayoría de los menores de 45 años⁴⁵. Aunque Corbyn ha atribuido al menos parte de la culpa de la crisis de la vivienda a la venta masiva de suelo y viviendas públicas a promotores guiados por el ánimo de lucro, los laboristas no han propuesto ninguna legislación para impedirlo. El Manifiesto se

⁴³ Observación realizada por Martin Wolf en «Reform council tax and close the generational wealth gap», *Financial Times*, 23 de marzo de 2018. Yo mismo he tratado el alcance de los impuestos sobre la riqueza en *Age Shock: How Finance is Failing Us*, 2ª ed., Londres y Nueva York 2011, pp. 263-267.

⁴⁴ Véase Allyson Pollock, «Healthcare for All», en M. Phipps (ed.), *For the Many: Preparing Labour for Power*, cit., pp. 129, 139-142. La izquierda laborista ha intentado presentar un nuevo proyecto de ley de restablecimiento, declarando que la salud es un «servicio no económico de interés general» para protegerlo de la ley de competencia de la Unión Europea. El proyecto de ley cuenta con el apoyo de apenas cuarenta parlamentarios laboristas, otra indicación de la fuerza de la derecha en el grupo parlamentario.

⁴⁵ Stuart Hodkinson, «Secure Homes for All», en M. Phipps (ed.), *For the Many: Preparing Labour for Power*, cit.

comprometía a «invertir para construir más de un millón de hogares» e insistía en que serían asequibles y ambientalmente responsables, pero no explicaba cómo se superarían las restricciones de recursos, por ejemplo, de ladrillos y albañiles. El plan laborista se basa en un programa de construcción de viviendas impulsado por las autoridades locales, que les permite endeudarse con la garantía de sus propios activos. Si las autoridades locales se encargan del desarrollo, se les debería permitir beneficiarse, a través de un «aumento de la recaudación», del aumento del valor del suelo que resulta de una mejor infraestructura pública social y de transporte, como bibliotecas, centros deportivos, mercados de agricultores, etcétera: el tipo de dotación necesaria para conseguir comunidades prósperas, pero que los promotores inmobiliarios privados escatiman para asegurar dividendos más altos para sus inversores.

La respuesta rompedora de Corbyn al atentado suicida de Manchester en mayo de 2017 –que vinculó las guerras británicas contra diversos países musulmanes con la posterior irrupción en Gran Bretaña del terrorismo islamista tras declarar que «debemos ser lo suficientemente valientes como para admitir que la guerra contra el terrorismo simplemente no está funcionando»– obtuvo un amplio apoyo entre el electorado⁴⁶. Pero esa ruptura retórica con los principios de la política exterior británica no se vio respaldada por compromisos políticos. Aunque el Manifiesto 2017 prometía «terminar con el apoyo a guerras de intervención unilaterales agresivas», era débil en asuntos exteriores y defensa, donde el laborismo tradicional de derechas aún mantenía su influencia: apoyo a la OTAN y a la industria armamentista, aumento de los gastos de defensa, renovación del sistema de armas nucleares Trident, pese a que su desguace liberaría anualmente 4 millardos de libras para otros fines. Aunque una posible mayoría de parlamentarios (incluidos miembros del SNP y de los Verdes) desearía dismantelar los Trident, los parlamentarios de la derecha laborista han podido vetar hasta el momento cualquier cuestionamiento al respecto, esgrimiendo los temores a la pérdida de empleos

⁴⁶ Según una encuesta de YouGov dada a conocer el 26 de mayo de 2017, el 53 por 100 de los consultados estaban de acuerdo en que las guerras del Reino Unido fueron al menos en parte responsables de los ataques terroristas, frente al 24 por 100 que pensaban que no lo eran; una encuesta más pequeña de Survation produjo los mismos resultados. Véase Milan Rai, «Corbyn's disappearing speech», *Peace News*, 22 de junio de 2017. Como señala Rai, las cuidadosas formulaciones de Corbyn –elaboradas por sus asesores clave Seumas Milne y Andrew Murray– se toparon con un torrente de denuncias de expertos y políticos del sistema, aunque algunos más tarde retomaron sus argumentos sin mencionar su nombre.

en las industrias de defensa y el seguro desagrado de Washington. Gran Bretaña depende totalmente de Estados Unidos para el funcionamiento de su supuesto «poder disuasivo nuclear independiente» y, por lo tanto, es probable que la política de defensa siga siendo un reducto de los fanáticos de Blair⁴⁷.

3. NUEVOS HORIZONTES PARA UNA NUEVA IZQUIERDA

se ha argumentado que la nueva izquierda laborista carece del tipo de infraestructura intelectual que proporcionó tanto apoyo al ascenso original de los neoliberales; en particular, una densa red de *think tanks*, centrados en el problema de convertir la erudición en política, operando en el espacio entre políticos y economistas y sociólogos afines⁴⁸. Aunque ello sea cierto en general, el liderazgo de Corbyn-McDonnell dispone de una variedad de recursos, incluido el trabajo –más o menos radical– de *think tanks* como la New Economics Foundation (NEF) y el Centre for Labour and Social Studies (CLASS), respaldado por los sindicatos, junto con contribuciones del Instituto Smith y del Institute for Public Policy Research (IPPR)⁴⁹. Aunque todavía no existe un equivalente real a la *Tribune* de Michael Foot o el Left Book Club de Victor Gollancz, Novara Media ofrece una plataforma para una amplia discusión de ideas, mientras la

⁴⁷ Véase Norman Dombey, «What Is Trident For?», *London Review of Books*, 5 de abril de 2007.

⁴⁸ Christine Berry, «The Making of a Movement: Who's Shaping Corbynism?», *Civil Society Futures*, 5 de diciembre de 2017.

⁴⁹ NEF: fundada en 1986 por los líderes de The Other Economic Summit (TOES), una alternativa a las cumbres del G7, y originalmente concentrada en la condonación de la deuda internacional, la campaña Jubilee 2000 y diversas iniciativas de comercio justo e inversión social. CLASS: fundada en 2012 por Unite, GMB y otros sindicatos del Reino Unido; sus proyectos actuales abordan la raza y la clase, la automatización, el mercado laboral y el Brexit. Smith Institute: fundado en 1996, asociado con Gordon Brown durante los años del Nuevo Laborismo; recientemente patrocinó el documento crítico de D. Walker y J. Tizard sobre las iniciativas de financiación privada, *Out of Contract: Time to move on from the 'love-in' with outsourcing and PF*, cit. IPPR: fundado en 1986 por Clive Hollick, semillero en la década de 1990 de investigadores de la Tercera Vía (Patricia Hewitt, David Miliband); fondos corporativos y de fundaciones. El informe de IPPR *Out of Shape* (2016) adoptaba una visión más crítica de las desigualdades de la economía del Reino Unido después del impacto del Brexit. John McDonnell ha dado la bienvenida a la Comisión de Justicia Económica del IPPR, que debería informar en otoño de 2018 sobre «política económica para una economía posterior al Brexit». En un folleto del IPPR, *Future Proof: Britain in the 2020s*, Mathew Lawrence advierte contra el peligro de «feudalismo económico» en la sociedad digital del mañana.

conferencia anual World Transformed supone un foro anclado «en la vida real» para el debate, junto con publicaciones activistas como *The Canary* y *Evolve Politics*. Por positivo que sea todo esto, todavía está muy lejos de la visión hegemónica mostrada por, digamos, John Strachey en su clásico de entreguerras *The Coming Struggle for Power* (1932).

El equipo de asesoría económica de McDonnell ha experimentado ciertos cambios, pero parece haberse consolidado desde las elecciones de 2017, jugando en él un papel central James Meadway, de 39 años, economista senior en la NEF, quien hasta cierto punto ejemplifica la relación entre generaciones más jóvenes y más maduras de asesores económicos de izquierda que se unieron en torno al proyecto Corbyn. Nacido en 1980, estudió economía e historia económica en la London School of Economics y en la School of Oriental and African Studies (SOAS) de la Universidad de Londres, donde completó su doctorado en 2013 bajo la supervisión de Costas Lapavistas⁵⁰. Meadway participó en el grupo de Investigación sobre Dinero y Finanzas en SOAS y contribuyó al volumen activista colectivo editado por Lapavitsas *Crisis in the Eurozone* (2012). En la NEF, el artículo de Meadway «Why We Need a New Macro-Economic Strategy» presentaba al Reino Unido como «encadenado a un sistema financiero sobreexplotado y disfuncional, que está simbióticamente vinculado a una economía real muy débil: «Una economía débil absorbe importaciones, requiriendo financiación, cuya demanda continua contribuye a respaldar un sistema financiero hipertrofiado», lo que hace que la formulación de cualquier política sea demasiado vulnerable a las demandas de los inversores.

«La clave para romper el dominio de la austeridad es socavar el sector financiero», argumentaba Meadway. «A su vez, la clave para socavar el sector financiero es fortalecer la economía real». Los instrumentos para reducir y remodelar el sector financiero podrían implicar la cancelación de la deuda y la división de los bancos. Los destinados a fortalecer la economía productiva incluirían no solo la noción ortodoxa de un Banco de Inversiones del Estado –el Royal Bank of Scotland, propiedad del Estado, podría usarse para financiar proyectos con claros objetivos públicos–,

⁵⁰ James Meadway, «Stocks, Flows and Uncertainty: Critical Problems in the Stock Flow Consistent Approach to Monetary Economics», SOAS, 2013. Se trataba de una crítica de izquierda (no muy acerba) al enfoque poskeynesiano del «*stock-flow consistent*» empleado para la creación de modelos macroeconómicos, propuestos inicialmente por Wynne Godley, que prestaban especial atención al acaparamiento de dinero en los circuitos de acumulación y, sobre todo, en el sistema bancario en la sombra.

sino también políticas menos convencionales: inyecciones directas de dinero procedente de la flexibilización cuantitativa en la actividad económica real, como financiar el proyecto de 500 millardos de libras del economista británico Dieter Helm para crear la correspondiente infraestructura verde: «Usada prudentemente y con moderación», la flexibilización cuantitativa popular podría ser «un golpe importante contra la dominación de las finanzas privadas sobre la economía pública». Meadway también se encogió de hombros ante el miedo convencional sobre la fuga de capitales, señalando que la imposición de controles de capital se había vuelto relativamente común, desde el «periodo de suspensión» de un año introducido por Malasia durante la crisis financiera asiática en 1997, hasta el bocado propinado por Gordon Brown a los activos de los bancos islandeses en 2008 y las medidas de enfriamiento introducidas por Brasil y Corea del Sur en 2009⁵¹.

Otros jóvenes economistas que merece la pena mencionar son Mary Robertson, coautora junto a Ben Fine y Kate Bayliss del estudio de SOAS sobre financiarización, privatización del agua y vivienda, y actualmente asesora económica de Corbyn⁵². Entretanto, se dice que el pensamiento laborista sobre la estrategia industrial se basa en el trabajo de Mariana Mazzucato sobre el «empresarialismo público», que subraya el papel de la investigación respaldada por el Estado en los avances tecnológicos del siglo XX, pero también el concepto de «infraestructura básica universal», incluida la sanidad y la asistencia social, como componente clave de la estrategia industrial del siglo XXI⁵³. Al mismo tiempo, McDonnell ha apoyado la petición de «servicios básicos universales»,

⁵¹ James Meadway, «Why We Need a New Macro-Economic Strategy», NEF, 2013, pp. 19, 23-28. Esto estaba muy a la izquierda del Manifiesto laborista de 2017, que afirmaba que «el Reino Unido tiene un sector financiero internacional exitoso», aunque el país también necesitaba un «sistema bancario seguro y socialmente útil» para satisfacer las necesidades locales y regionales: *For the Many: Preparing Labour for Power*, cit., p. 16.

⁵² Véase el número especial de *New Political Economy*, vol. 22, 2017, sobre «Material Cultures of Financialization», editado por Kate Bayliss, Ben Fine y Mary Robertson.

⁵³ Véase Mariana Mazzucato, *The Entrepreneurial State*, Londres, 2015; y *The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy*, Londres, 2018. La Universal Basic Infrastructure fue propuesta por la Industrial Strategy Commission, liderada conjuntamente por investigadores de la Universidad de Manchester y del Sheffield Political Economy Research Institute (SPERI), que ahora parece haberse convertido en un imán para los economistas políticos radicales jóvenes, así como para estudiosos de más edad como Andrew Gamble. (Véase, por ejemplo, la penetrante crítica de David Coates por Scott Lavery en el blog del SPERI.)

en contraposición a la renta básica universal propuesta por Henrietta Moore (University College London) y Jonathan Portes (King's College London)⁵⁴. Este último, exfuncionario del Tesoro y economista jefe del gabinete del gobierno durante la crisis financiera, fue coautor junto a Simon Wren-Lewis (Oxford) del documento en que se apoyaba la Regla de Credibilidad Fiscal de McDonnell –que prometía equilibrar el gasto gubernamental en un ciclo de cinco años, endeudándose únicamente para las partidas de inversión–, de la que Meadway se muestra ahora partidario⁵⁵. Otros pensadores de la generación anterior atraídos a la órbita de la izquierda laborista incluyen a Ann Pettifor, miembro de la New Economics Foundation y autora de *The Coming First World Debt Crisis* (2006) y *The Production of Money* (2017), y Graham Turner, economista del Tokai Bank japonés durante la década de 1990, ahora consultor económico y autor de *The Credit Crunch* (2008)⁵⁶. McDonnell encargó un informe a Turner, «Financing Investment» (2017), muy crítico con la actividad crediticia de los bancos nacionales dirigido a sectores no productivos, en particular al «abultado» sector inmobiliario.

¿Banca de utilidad pública?

En lo que sigue me baso en el trabajo de estos y otros economistas heterodoxos, pero también voy más allá para señalar medidas que sean a la vez prácticas y radicales. Todavía no son anticapitalistas, pero desafían la pobreza, la desigualdad y la mercantilización. Mejoran la resistencia popular y el control potencial sobre el proceso de acumulación. Promueven la democracia y la supervisión popular del excedente social y cómo se invierte. En el límite, una medida progresiva y popular podría ser de transición, yendo más allá del capitalismo tal como lo conocemos, incorporarse en nuevas formas de cooperación y asociación y basarse en la convicción de que el libre desarrollo de todos es la condición previa para el libre desarrollo de cada uno. Las diversas propuestas expuestas a

⁵⁴ Henrietta Moore, Jonathan Portes, Andrew Percy, Howard Reed, «Social Prosperity for the Future: A Proposal for Universal Basic Services», Institute for Global Prosperity, 2017.

⁵⁵ Jonathan Portes y Simon Wren-Lewis, «Issues in the Design of Fiscal Policy Rules», Department of Economics Discussion Paper 704, University of Oxford, mayo de 2014. Sobre la defensa por Meadway de la «regla de credibilidad fiscal», véase su discusión con Richard Murphy, autor de *The Joy of Tax* (2015) y uno de los primeros defensores de la «flexibilización cuantitativa popular», publicado en el blog de este último como «A note to John McDonnell's economic adviser on fiscal rules and their desirability», 1 de agosto de 2016.

⁵⁶ Reseñado por R. Taggart Murphy, «Burbujanomics», *NLR* 57, julio-agosto de 2009.

continuación –impuestos sobre los pasivos de los mayores bancos y los activos o ingresos de las grandes compañías tecnológicas, la reforma de los fondos de pensiones, el «capital público» administrado por una red de fondos sociales, la condonación masiva de deudas– son obviamente incompletas y esquemáticas, pero señalarían una dirección completamente nueva. Son pasos modestos pero tangibles hacia «la expropiación de los expropiadores» y la construcción del «capital público» en un régimen de «acumulación responsable» y de «socialismo en red».

En su ensayo «Crisis en el corazón del sistema», Peter Gowan contrastaba el modelo de «crédito y banca de utilidad pública», orientado al sector productivo, con un «sistema de crédito capitalista privado» que «subordina todas las demás actividades económicas a su propio impulso de obtención de beneficios». Como él mismo argumentaba:

Todos los sistemas económicos modernos, capitalistas o no, necesitan instituciones crediticias para fluidificar los intercambios y las transacciones; necesitan bancos para producir dinero crediticio y sistemas de compensación para facilitar los pagos de las deudas. Se trata de servicios públicos tan vitales como un servicio de salud.

Pero esos sistemas de crédito también son intrínsecamente inestables, proseguía Gowan: «La esencia de un banco es que no posee fondos suficientes para cubrir todos los derechos de sus depositantes en un momento determinado. Garantizar la seguridad del sistema exige que se suprima la competencia entre los bancos».

Por otro lado, las cuestiones concernientes a las políticas relativas a la asignación del crédito revisten una gran importancia económica, social y política. Así, pues, la propiedad pública del sistema crediticio y bancario es racional y, en realidad, necesaria, si bien debe estar arropada por un control democrático de la misma⁵⁷.

Como señalaba Gowan, un sistema crediticio de utilidad pública puede operar dentro de una economía capitalista: podría decirse que los *Landesbanken* alemanes y los bancos de posguerra japoneses respondían, de forma diferente, a esa función.

⁵⁷ Peter Gowan, «Crisis in the Heartland: Consequences of the New Wall Street System», *NLR* 55, enero-febrero de 2009; ed. cast., «Crisis en el corazón del sistema», *NLR* 55, marzo-abril de 2009, p. 22. Véase también Ann Pettifor, *The Production of Money: How to Break the Power of Bankers*, Londres y Nueva York 2017, pp. 93-153; y Mary Mellor, *The Future of Money: From Financial Crisis to Public Resource*, Londres, 2010.

En cambio, el modelo de crédito y bancario capitalista-privado opera bajo la lógica del «capital monetario», en la fórmula de Marx, D-D': adelantar dinero a otros para ganar más dinero. Este fue el sistema adoptado en el Reino Unido y Estados Unidos desde la década de 1980, entrelazado con el sistema monetario internacional del dólar fiduciario, tal como argumentaba Gowan: «Entronizar al capital dinerario». Implicaba la subordinación de las funciones públicas del sistema de crédito a la autoexpansión del capital monetario, que viene a absorber una parte creciente de los beneficios generados en todos los demás sectores. El sistema de crédito capitalista-privado, que había sido un generador extraordinario de riqueza dentro del sector financiero y el motor del consumo alimentado por la deuda que había impulsado el crecimiento desde la década de 1990, se hallaba ahora en una profunda crisis. La cuestión de una nueva forma de banca de servicio público vuelve a estar en la agenda. Como hemos visto, los proyectos para orientar el Royal Bank of Scotland de propiedad pública hacia la inversión productiva y socialmente útil serían ejemplos concretos de esto.

Repensar el capital público

La importancia del capital público apenas merece subrayarse. Como ha observado Wolfgang Streeck, la crisis general de las finanzas públicas en las economías del capitalismo avanzado es particularmente nefasta para las políticas socialdemócratas, porque reduce las posibilidades de redistribución⁵⁸. Mientras que el poder de introducir impuestos se ha debilitado enormemente –por la reducción de la base imponible de empleados a tiempo completo y la prevalencia de bajos salarios, por el desvío de las ganancias de las corporaciones hacia paraísos fiscales en el exterior, así como la posibilidad de optar por la jurisdicción impositiva más baja–, la necesidad de recursos públicos es mayor que nunca para satisfacer los crecientes desafíos demográficos y los imperativos medioambientales⁵⁹. El gobierno británico se halla en una situación peculiarmente difícil a

⁵⁸ Wolfgang Streeck, «¿Cómo terminará el capitalismo?», *NLR* 87, julio-agosto de 2014.

⁵⁹ Un análisis reciente mostró que los tipos impositivos efectivos para las mayores compañías tecnológicas e industriales han caído desde 2008 alrededor del 13 por 100 en relación con las ganancias obtenidas durante ese mismo periodo. El informe agrega que el impuesto que las compañías afirmaron pagar era sustancialmente más alto que lo que realmente se pagó durante un periodo de tres años. Véase Rochelle Toplensky, «Multinationals pay less tax despite curb on avoidance», *Financial Times*, 10 de marzo de 2018.

este respecto al contar con tantos paraísos fiscales en su territorio. Sin embargo, la «ola gris» del aumento de los costes de la atención médica será enormemente cara, ya que involucra los costes de vida y de salud de aproximadamente el 20 por 100 de la población. Abordar el cambio climático exigirá gastos masivos en energías renovables, mientras que las grotescas desigualdades registradas a escala nacional e internacional deben abordarse con programas de redistribución directa. Además, la educación superior y la capacitación deben estar disponibles para todos los adultos jóvenes de forma gratuita; las mujeres necesitan igual remuneración, recursos y respeto; y se necesita mucho más gasto para los «primeros años». Para las economías modernas son fundamentales mayores y mejores dotaciones en investigación y desarrollo en los campos de las ciencias de la vida, la tecnología de la información y el transporte. El efecto combinado de estas tendencias es hacer que la búsqueda de impuestos efectivos –y de una propiedad pública eficiente– estén entre las cuestiones clave que debe afrontar la nueva izquierda emergente.

Tal como argumenta la izquierda laborista, el sector financiero será una fuente importante de nuevos ingresos. La crisis de 2008 y sus consecuencias condujeron a una mayor concentración y oligopolio en el sector, dando un giro adicional a la importancia en el mismo del lema «demasiado grande para caer». El gobierno británico introdujo un impuesto bancario en 2011, pero ha reducido considerablemente su incidencia tras la presión de HSBC y StanChart. El gobierno australiano, bastante conservador, ha sido más audaz, introduciendo un gravamen trimestral del 0,015 por 100 sobre los pasivos de los cinco mayores bancos del país, efectivo desde julio de 2017. Esa medida obligará a los «principales bancos» a pagar por la subvención pública implícita de la que disfrutaban. El impuesto recaerá en las fuentes de los fondos de los bancos y se espera que recaude entre 1,5 y 1,6 millardos de dólares australianos cada año. Los bancos se sentirán tentados a pasar este coste adicional a sus clientes, pero se verán restringidos por el conocimiento de que los bancos más pequeños no tendrían que hacerlo. La medida estimulará la competencia en el sector financiero y se revisará dentro de dos años⁶⁰. La disposición a imponer tasas más altas a los bancos de mayor tamaño se justifica por el hecho de que disfrutaban del estatus de «demasiado grande para caer» y están pagando por ese seguro implícito. Esta medida podría introducirse en las principales jurisdicciones financieras.

⁶⁰ Phillip Hawkins, «The Major Bank Levy Explained», sitio *web* del Parlamento de Australia, 23 de junio de 2017.

Sería perfectamente posible introducir el impuesto a los activos corporativos propuesto por Rudolf Meidner, economista jefe de la federación sindical sueca y uno de los arquitectos del Estado del bienestar de ese país desde la década de 1970⁶¹. Esto requeriría que las empresas emitan cada año nuevas acciones equivalentes al 10 por 100 de los beneficios anuales. Las acciones cobradas de esta forma no se venderían, sino que se mantendrían bajo la tutela de una red regional de «fondos para empleados» y se guardarían para financiar futuros beneficios, tramo por tramo a medida que sucesivas cohortes de edad alcancen la edad de jubilación. Aparte de ello, todos los dividendos, los derechos de emisión y el crecimiento del capital se reinvertirían en la red del fondo, que se utilizaría para alentar la acumulación responsable⁶². Las políticas detalladas preferidas por cada fondo serían el resultado de un debate democrático.

Las actuales grandes empresas tecnológicas tienen un ansia de poder monopólico tan intensa como la de los barones-ladrones de antaño. En 2017, Facebook, Amazon, Google y Microsoft gastaban más que los bancos en cabildeo político en Washington para asegurarse un trato fiscal favorable cuando repatriaran sus beneficios a Estados Unidos. La pose filantrópica de las grandes empresas tecnológicas y la profusión de servicios «gratuitos» o baratos ofrecidos en la *web* han permitido a los «titanes de Silicon Valley» aparecer como los «salvadores del mundo»⁶³. Han utilizado su control monopólico de la propiedad intelectual para escapar de los impuestos a una escala masiva. Dado que manipulan los datos de ganancias, hay muchas razones para calcular su deuda tributaria utilizando sus ingresos como índice y para recopilar información de la cadena de suministro y el gasto en mercadotecnia. La OCDE ha constatado este problema y la UE lo ha afrontado, aunque tardíamente, con un plan para imponer gravámenes a las ciento cincuenta mayores entidades corporativas que operan en la UE por volumen de negocios y valor de capital; la mitad de ellas son de propiedad estadounidense y la mayoría del resto europeas, pero también hay algunas japonesas y chinas. El impuesto se fijó en el 3 por 100 de los ingresos y se estimó que produciría unos 5 millardos de euros. Esta tentativa, vacilante y modesta, vino acompañada por la

⁶¹ Rudolf Meidner, *Employee Investment Funds*, Londres, 1978.

⁶² Sobre la experiencia sueca, véase Phillip Whyman, «Post-Keynesianism, the Socialisation of Investment and Swedish Wage-earner Funds», *Cambridge Journal of Economics*, enero de 2006.

⁶³ Gillian Tett, «The Big Tech bonanza demands scrutiny», *Financial Times*, 22 de septiembre de 2017. Véase también Linsey McGoey, *No Such Thing as a Free Gift*, Londres y Nueva York, 2015.

ferviente afirmación de que de ninguna manera era una respuesta o una represalia frente a las iniciativas comerciales de otros países.

Las instituciones públicas ya poseen fracciones importantes del sector privado. El rescate de los bancos realizado en septiembre de 2008 hizo llegar a los Departamentos del Tesoro estadounidense y británico participaciones masivas en la mayoría de los bancos; en particular, dos tercios del Royal Bank of Scotland siguen siendo de propiedad estatal. Los gobiernos han administrado típicamente los activos que han llegado a su poder de manera inerte, negándose a utilizarlos para influir en su administración o para canalizar futuras fuentes de ingresos hacia buenas causas. Los fondos soberanos de inversión, creados como estabilizador anticíclico, como una forma de distribuir el beneficio de ganancias inesperadas, o como un mecanismo para redistribuir la renta entre las generaciones, pueden servir como ejemplo opuesto. Una vez que existe ese «capital público» debería efectuar inversiones responsables, utilizando su influencia para alentar tecnologías sostenibles y prácticas de trabajo decentes⁶⁴. Desde finales de la década de 1980 el gobierno noruego ha canalizado los ingresos excedentes del petróleo a una entidad de ese tipo, creando un fondo que ahora cuenta con alrededor de 1 billón de dólares, y cuyo tamaño es tal que está a punto de convertirse en un inversor «universal»⁶⁵. Sin embargo, la posibilidad de dedicar activos públicos a un fondo soberano de inversión no se limita en absoluto a los Estados petroleros. El programa de la Seguridad Social estadounidense ha almacenado los ingresos excedentes en un fondo fiduciario, dedicado a pagar pensiones a los contribuyentes cuando alcanzan la edad requerida; sin embargo, se le prohíbe invertir activamente este dinero por temor a que eso pudiera significar un paso hacia el socialismo.

⁶⁴ Un estudio informativo sobre el «capital público» de Angela Cummine, *Citizen's Wealth: Why (and How) Sovereign Funds Should Be Managed by the People for the People*, New Haven (CT), 2017, detecta problemas y dificultades, pero pone al lector al tanto de que tenemos aquí un nuevo e inesperado escenario de economía política, disputa democrática y lucha de clases. Téngase en cuenta que cualquier movilización de los fondos de pensiones tendría que abordarse con gran cuidado. Si la competencia no se controla atentamente, los administradores públicos simplemente reforzarán los imperativos más regresivos de la acumulación capitalista. Véanse el argumento y los hallazgos importantes de Michael McCarthy, «Politics as a Market Force: The Class Politics of ESG Investing», en Kevin Skerrett *et al.* (eds.), *The Contradictions of Pension Fund Capitalism*, Ithaca (NY), 2018, pp. 99-120.

⁶⁵ Paul Cleary, *Trillion Dollar Baby*, Londres, 2016.

Reforma de los fondos de pensiones

Los activos de los fondos institucionales gestionados en el Reino Unido son enormes: más de 4 billones de libras se hallan fundamentalmente en manos de fondos de pensiones y compañías de seguros y están siendo administrados en beneficio de clientes británicos. Sin embargo, los principios de su gestión son dudosos o confusos. Podrían dirigirse a fomentar la inversión responsable: la movilización, incluso de un tramo muy modesto de esa riqueza masiva, podría suponer una gran contribución al esfuerzo de inversión nacional. Fred Block insiste en la importancia de «reorientar los ahorros de la gente hacia entidades financieras públicas y sin fines de lucro», que pongan el crédito a disposición del desarrollo económico local, la rehabilitación de áreas urbanas y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. «Esta democratización de la toma de decisiones financieras es una herramienta fundamental para dar a los ciudadanos la capacidad de configurar las comunidades donde viven»⁶⁶. Los proveedores comerciales de pensiones disponen de ese sector gracias a la legislación tributaria que les permite a sus clientes no pagar impuestos por los ahorros para su jubilación. Los fondos de pensiones son, pues, uno de los objetivos obvios de una reforma que obligaría a sus directivos a tomar nota de las prioridades sociales, los derechos de los empleados y las normas medioambientales. Sin embargo, con demasiada frecuencia la administración de esos fondos ha fomentado el «capitalismo gris», con sus procedimientos opacos y complejos, y la falta de satisfacción incluso para sus supuestos beneficiarios. Los administradores de estos fondos incurren en grandes gastos de marketing y administrativos, que vacían el valor de los fondos sin eliminar su inseguridad. Sin embargo, con reglas comerciales sensatas puede evitarse un «movimiento» excesivo [*churn*] de la inversión. Los inversores institucionales también pueden ser obligados a controlar el comportamiento de las empresas en las que invierten, a respetar los derechos de los trabajadores y a evitar las prácticas más descaradamente irresponsables. Los inversores institucionales también podrían ayudar a disuadir a las corporaciones financieras de presionar el botón del pánico cada vez que un gobierno actúa de una manera que no les gusta. La gestión moderna de las carteras de inversión insiste en que la mejor manera de inducir a una corporación a comportarse de manera responsable es el «compromiso», no la «huida».

⁶⁶ Fred Block, «Towards a new paradigm», en David Coates (ed.), *Reflections on the Future of the Left*, Newcastle, 2017, pp. 45-66.

Las pensiones públicas en el Reino Unido se cuentan entre las menos generosas de los países avanzados⁶⁷. El gobierno de coalición de conservadores y liberal-demócratas introdujo una pensión personal adicional, a la cual el Estado haría contribuciones equivalentes. Los empleados a tiempo completo quedarían automáticamente inscritos pero podrían optar por quedar fuera. Los trabajadores por cuenta propia no están cubiertos, e incluso los que sí lo están encontrarán que la pensión que les corresponde está lamentablemente muy por debajo de los ingresos de jubilación que necesitarán. Los planes de pensiones ocupacionales se han visto afectados por los efectos de la flexibilización cuantitativa, que al reducir los tipos de interés ha disminuido la rentabilidad correspondiente a las pensiones. Durante un tiempo, los futuros pensionistas podrían alegrarse al ver crecer lo que supuestamente llegarán a cobrar, pero cuando les llegue la hora de convertir esos ahorros en ingresos, los bajos tipos de interés darán lugar a una desagradable decepción. Un gobierno de Corbyn debería explorar pensiones secundarias para todos, permitiendo a los titulares de fondos adaptar sus títulos actuales a un plan universal más seguro. Debería crearse un grupo de trabajo sobre las pensiones para simplificar su provisión, con instrucciones para integrar todas las formas de pensión secundaria en un único plan que garantice una vejez activa y decente para todos y que represente un pacto honorable entre las generaciones. La provisión ocupacional y comercial existente debería estar obligada a cumplir normas comunes y, en particular, a reducir los cargos anuales al 0,2 por 100⁶⁸. Los fondos de pensiones deberían gestionarse con objetivos sociales claros y sometidos a auditorías periódicas; los contribuyentes y los beneficiarios deberían participar de algún modo en la administración del fondo.

Cancelación de deudas y dinero arrojado desde helicópteros

La «Nueva Estrategia Macroeconómica» de Meadway contempló con buenos ojos la cancelación de la deuda, pero otros se lo han tomado con más calma. Sostienen que el terco endeudamiento de los bancos, los gobiernos y los hogares ensombrece la economía mundial, que necesita una mayor demanda para mantener el poder adquisitivo de los hogares. Ann Pettifor y Steve Keen han sugerido que las versiones modificadas

⁶⁷ John Hills, *Good Times, Bad Times: The Welfare Myth of Them and Us*, Londres, 2014.

⁶⁸ Yo mismo he dicho mucho más al respecto en *Age Shock: How Finance is Failing Us*, cit., pp. 195-226.

del dispositivo clásico del Jubileo serían muy adecuadas para la tarea⁶⁹. El jubileo bíblico preveía una cancelación de las deudas acumuladas cada cuarenta y nueve años, brindando socorro a todos los endeudados. El nuevo enfoque es más amplio. Cada ciudadano recibiría un dividendo social especial de, digamos, 40.000 libras. Este dinero tendría que usarse, primero, para saldar cualquier deuda que el individuo arrastrara, ya fuera deuda hipotecaria, deuda de consumo o deuda estudiantil, y cualquier resto podría ser luego gastado libremente. Lo importante aquí es que todos se beneficiarían, no solo los endeudados. Si la ayuda sólo se les diera a estos últimos, podría considerarse injusta, premiando a los derrochadores imprudentes. Este enfoque de condonación de deudas utiliza el universalismo para promover la legitimidad de una medida igualitaria (obsérvese que 40.000 libras es bastante dinero para la mayoría, pero una bagatela para el 1 por 100 más rico).

Una versión más modesta, etiquetada como Fondo Universal de Oportunidades Básicas, propone la idea de un «dividendo» de 10.000 libras pagado en dos plazos, durante diez años, para cada ciudadano menor de 55 años⁷⁰. Ese «Fondo de Oportunidades» se crearía como una entidad soberana que se financiaría con deuda pública, un impuesto sobre el patrimonio y la inversión de «gravámenes corporativos». Si bien los destinatarios podrían gastar el dinero como quisieran, se les alentaría a invertirlo en «mejoras»: adquirir habilidades, contribuir a un pequeño negocio, etcétera. La propuesta de condonación de la deuda al estilo del Jubileo es mayor –40.000 libras en lugar de 10.000– y ayudaría a pagar la deuda de los graduados. Ambos planteamientos podrían presentarse como trampolines hacia una renta básica universal. Los críticos de esta última argumentan que la envergadura de su gasto es un gran obstáculo. Los autores del Fondo de Oportunidades redujeron la factura al compensar impuestos y prestaciones sociales, pero aun así prevén un coste de 145 millardos de libras a lo largo de diez años.

Estas propuestas no están tan alejadas del plan de arrojar «dinero desde helicópteros» respaldado por Milton Friedman en 1968, según el cual,

⁶⁹ Las propuestas de Steve Keen se pueden consultar con más facilidad en su sitio web. Véase también A. Pettifor, *The Production of Money*, cit., p. 43. Pettifor estuvo estrechamente involucrada en Jubilee 2000, una afortunada campaña para cancelar la deuda soberana de los países pobres.

⁷⁰ Anthony Painter, Jake Thorold y Jamie Cooke, «Pathways to Universal Basic Income: The Case for a Universal Basic Opportunity Fund», Royal Society of Arts, febrero de 2018.

la forma de restaurar la demanda en un momento de crisis de envergadura sería cargar helicópteros con billetes de banco y derramarlos sobre la población desde los cielos. Robert Skidelsky explica que parte de la dificultad es que muchos los guardarían en lugar de gastarlos:

Por eso muchos defensores contemporáneos del dinero vertido desde helicópteros como Willem Buiters y Adair Turner lo contemplan principalmente en términos de financiación monetaria del gasto público adicional. El gobierno debería pagar, por ejemplo, un programa de inversión, no emitiendo deuda pública sino pidiendo prestado al banco central. Esto aumentaría el déficit del gobierno, pero no la deuda nacional, ya que un préstamo del banco central al gobierno no está destinado a reembolsarse, de modo que el gobierno adquiere un activo pero no la obligación de pago correspondiente⁷¹.

Una comprensión más amplia de «la producción de dinero» fortalecerá la nueva narrativa sobre la necesidad de inversión pública. En una indicación de los nuevos vientos que soplan en el Reino Unido desde el «doble shock» del Brexit y de Corbyn, el principal comentarista económico del *Financial Times* ha examinado la posibilidad de «políticas verdaderamente no convencionales, que posiblemente incluirían la financiación monetaria directa del gasto público», si una gran caída del precio de los activos, en el contexto de un sector financiero aún muy apalancado, amenazara con paralizar la demanda. Esa «incitación al helicóptero» fue seguida por una imputación ética del *laissez faire*: «Es inmoral, y en última instancia imposible, sacrificar el bienestar de la mayoría de las personas para aplacar a los dioses de los mercados financieros. Si una política diseñada para estabilizar nuestras economías desestabiliza al sector financiero, la respuesta tiene que ser una reforma aún más radical de este último»⁷².

4. PERSPECTIVAS

Aunque la izquierda laborista tiene ahora una posibilidad real de hacerse con el gobierno, todavía sigue siendo muy débil. Salvo accidentes, la posición de Corbyn como líder parece segura por ahora, pero su control sobre

⁷¹ Robert Skidelsky, «A tweak to helicopter money will help the economy to take off», *Financial Times*, 5 de agosto de 2016.

⁷² Martin Wolf, «A bit of fear is exactly what markets need», *Financial Times*, 14 de febrero de 2018. Wolf y Adair Turner pertenecen a una escuela de pensamiento radical dentro del *establishment*, que se muestra partidaria de la «financiación monetaria abierta» y de un «sistema monetario soberano». Véase A. Pettifor, *The Production of Money*, cit., pp. 93-130.

el partido no debería darse por hecho. La izquierda laborista, fortalecida por la notable afluencia de 350.000 nuevos miembros, ha avanzado a través de las estructuras laberínticas de los comités, pero la organización del partido a escala nacional y regional sigue siendo fundamentalmente antidemocrática, con decisiones tomadas por pequeñas camarillas y en las que raramente se aplica el principio de «un miembro, un voto». En muchos de los comités clave, el equilibrio lo mantienen los representantes de un centro amorfo, a los que pueden coaccionar funcionarios regionales o sindicales para hacer descarrilar las iniciativas democratizadoras. La mayoría actual de Corbyn en el Comité Ejecutivo Nacional puede resultar vulnerable a este tipo de presión. Los activistas de Momentum están impulsando un modesto programa de selección renovada, con la esperanza de que los candidatos de la izquierda laborista sean elegidos en alrededor de un tercio de los distritos electorales marginales. Pero los funcionarios regionales del partido, en su mayoría blairistas –a veces mujeres– controlan gran parte del proceso de selección, notoriamente en las West Midlands, y tienen un largo historial en la cancelación de reuniones o la exclusión de miembros para salirse con la suya.

De los actuales doscientos sesenta y dos parlamentarios laboristas, alrededor de sesenta son blairistas del núcleo duro, que operan en tándem con personajes como Peter Mandelson en la Cámara de los Lores. Abiertamente enfrentados a él, no pierden ocasión de calumniar a Corbyn, pero reservan sus principales esfuerzos para las campañas mediáticas en su contra en vísperas de elecciones locales o nacionales⁷³. Un grupo más pequeño, probablemente de unos cuarenta parlamentarios como máximo, son genuinos simpatizantes de la izquierda laborista, siendo el principal entre ellos John McDonnell, el secretario del Tesoro en la sombra de Corbyn. Pero la gran mayoría de los parlamentarios laboristas, en torno a ciento sesenta, son simples oportunistas. Tienen un ojo puesto en la opción principal, pero pocos compromisos firmes. Por el momento se han reconciliado con Corbyn, gracias a sus éxitos electorales y a la lenta acumulación de poder y mecenazgo en la Oficina del Líder de la Oposición, a diferencia de lo que ocurre en la sede del partido en Southside, Victoria, que todavía es un bastión de la derecha.

⁷³ Más recientemente, la derecha laborista ha organizado una campaña concertada de desprestigio contra Corbyn acusándolo de «antisemitismo» en vísperas de las elecciones locales de mayo de 2018, aunque se apagó en cuanto terminó la votación. A Corbyn no se le puede achacar ni una sombra de prejuicio, aunque es un acérrimo crítico de las políticas asesinas de Netanyahu en Gaza. Para un análisis detallado de la campaña, véase Daniel Finn, «Corbyn under Fire», *Jacobin*, 9 de abril de 2018.

Pero lo abandonarían en un santiamén si percibieran un cambio de viento en la dirección opuesta. Si Corbyn llegara a Downing Street, la fracción blairista pediría un retorno a la austeridad y la privatización en la primera oportunidad que se le presentase. El contexto político para tal empeño podría ser un gobierno nacional, como en la década de 1930. El lamentable destino de Ramsay MacDonald en aquel momento –o de los liberal-demócratas después de 2010– debería advertir en contra de atender a esos cantos de sirena. Para formar un gobierno, los laboristas pueden requerir un acuerdo con el Partido Nacional Escocés (SNP), que quizá permitiría iniciativas progresistas, pero no hay garantías de ello. El gobierno del SNP en Holyrood ha sido hasta ahora muy prudente.

Las perspectivas económicas siguen siendo sombrías. Dado el alto nivel de endeudamiento de los hogares, un gobierno de Corbyn pagaría un alto costo político si se viera obligado a elevar los tipos de interés a instancias de «los mercados». El Brexit sigue siendo un territorio explorado; una «transición» perpetuamente prolongada, durante la cual hay muy pocos cambios⁷⁴. Pero las guerras arancelarias, las sacudidas cambiarias, el aumento de los tipos de interés, el inicio de una recesión o las turbulencias geopolíticas podrían ocasionar nuevos zarandeos, cuando no embotellamientos, bancarrotas y los supermercados vacíos que presagiaban los partidarios de la permanencia en la Unión Europea. El peligro real puede no ser el «borde del acantilado», sino el *statu quo* del continuo estancamiento; es probable que el nivel medio de vida británico, ya deprimido, se deteriore aún más.

Tampoco hay ninguna seguridad sobre cuándo y en qué condiciones se celebrarán las próximas elecciones en el Reino Unido. El gobierno de May se enfrenta al creciente desencanto popular con respecto a los resultados de dos años de negociaciones sobre el Brexit en gran parte infructuosas. Podría caer con bastante facilidad si los *tories* «rebeldes» se mantuvieran en sus trece; pero cuando se llega a votaciones cruciales se echan atrás, temerosos de precipitar una convocatoria de elecciones. Los

⁷⁴ El secretario del Tesoro de May se fue involuntariamente de la lengua en Davos con respecto al final deseado para el Brexit de los negociadores británicos: «Estamos ante dos economías completamente interconectadas y alineadas, con altos niveles de intercambio entre ellas, que intentan separarse selectivamente y, con suerte lo menos posible», Philip Hammond, «Davos 2018: Chancellor's speech at the CBI's British Business Leaders Lunch», 25 de enero de 2018. El objetivo de Hammond, por supuesto, no deja la frontera de Irlanda del Norte o la pertenencia británica a la UE como meros detalles.

partidos de oposición no pueden prevalecer en el Parlamento a menos que se les unan muchos más conservadores. El Manifiesto Laborista de 2017 prometía su apoyo para una Convención Constitucional, un paso muy necesario hacia la democratización del mal llamado Reino Unido. En términos electorales, un gobierno de Corbyn requeriría no solo votos tácticos para los laboristas emitidos por los seguidores de los partidos más pequeños, lo que Corbyn logró en notable medida durante 2017, sino también un colapso del voto conservador, la receta para las mayorías de Blair entre 1997 y 2005. La cólera por la «traición» al Brexit puede provocar que algunos votantes conservadores vuelvan al UKIP, aunque no consigan que salga elegido alguno de sus miembros como parlamentario. Mientras se multiplican los abandonos de edificios en las calles principales y caen los salarios reales, un gobierno renqueante de May, tambaleándose hasta 2022, consumido por las divisiones internas sobre la forma preferida de Brexit por parte del *establishment* británico, podría diseñar tal escenario. Teniendo en cuenta esa posibilidad, es aún más importante avanzar en una alternativa real y plausible al *statu quo*, grotesco y quebrantado, del Reino Unido.